

Raymundo Riva Palacio

■ La última frontera

El Ejército Mexicano ha cometido violaciones a los derechos humanos desde que inició la guerra contra los cárteles de las drogas en diciembre de 2006. Sólo en este año promedian 140 quejas por mes —casi cinco por día—, que abarcan violaciones y detenciones forzadas, torturas y asesinatos. Terrible y lamentable, por lo que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha investigado 26 casos, y en 17 de ellos documentó torturas. Para el gobierno son casos aislados y los responsables han sido castigados. En efecto, ese número no dibuja un patrón de violaciones a los derechos humanos por parte del Ejército, pero no obstante uno es demasiado.

Por eso, el Ejército Mexicano está en el banquillo de los acusados, siendo juzgado de manera sumaria. Las críticas en los medios son continuas. Las denuncias de los políticos de oposición, aunque cuidadosas, son permanentes. La Suprema Corte de Justicia analiza acotar el fuero militar y que delitos del orden común se juzguen fuera del ámbito castrense. En el Congreso de la Unión hay un debate abierto sobre la constitucionalidad de la participación de las tropas en la guerra contra el narcotráfico. Y en altos mandos militares hay molestia por el costo político y social que están pagando, y por la erosión que sienten que va creciendo con respecto a su imagen.

El trabajo de vigilancia, seguimiento y denuncia que han hecho las instituciones mexicanas, ha servido para que desde el exterior tengan suficiente metralla para disparar contra los militares mexicanos. Un intenso trabajo de cabildeo en el Capitolio realizado por varias ONG, como Human Rights Watch, un grupo de presión con vínculos indirectos al Departamento de Estado y directos al financiero George Soros, y su alfil en México, el exsecretario de Relaciones Exteriores Jorge Castañeda, ha logrado que los sectores más conservadores en el Capitolio y el ala dura de los demócratas, estén unidos en la denuncia sistemática del Ejército Mexicano.

La última expresión se dio la semana pasada cuando el senador Patrick Leahy, un demócrata de Vermont, que preside el Subcomi-

té de Operaciones en el Extranjero del poderoso Comité de Apropiaciones (que revisa el gasto público de Estados Unidos en el mundo), presionó para que el Departamento de Estado aplazara emitir un reporte donde certificaba que el gobierno mexicano observa los derechos humanos en la guerra contra el narcotráfico, que es precondición para entregar el total de fondos aprobados dentro de la Iniciativa Mérida. Los fondos retenidos alcanzan los cien millones de dólares, que para efectos prácticos son reducidos, pero en términos políticos son una cuchillada al corazón del gobierno mexicano.

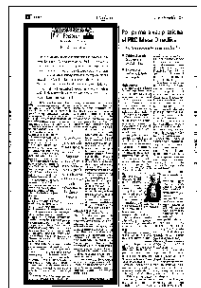
La embestida ha sido persistente. Las élites estadounidenses no han dejado de expresarse a través de sus medios. *The Washington Post*, el periódico más influyente en la capital estadounidense, por ejemplo, lleva meses con una cobertura especial sobre la guerra contra las drogas, donde la crítica al Ejército ha sido una constante, lo que ha generado alerta dentro del gobierno mexicano por las consecuencias que pueda tener, como ya se demostró en el caso de Leahy, donde todo se ha alineado para castigar a México.

El momento es muy tramposo, porque llevados por la inagotable inteligencia emocional mexicana, nos montamos rápidamente al coro

que llega de Washington, confundiendo las trincheras y favoreciendo intereses foráneos. Esto no significa que deban cejar las denuncias contra los abusos militares en el momento en que se den, ni cancelar un abordaje crítico al diseño de la guerra contra los cárteles. Lo que significa es que analicemos con inteligencia racional y en su contexto el papel de las Fuerzas Armadas, pero sin caer en la manipulación de muchos críticos, que ni son tan autónomos, ni son tan independientes como predicen.

Los cuerpos de seguridad en el mundo están bajo dura revisión.

Continúa en siguiente hoja



En Estados Unidos el presidente Barack Obama divulgó cuatro memorandos secretos del Departamento de Justicia durante la Administración Bush donde legalizaban la tortura en los interrogatorios de presuntos terroristas, como el de Khaled Sheikh Mohammed, el jefe operativo de los atentados terroristas de 2001, quien fue sumergido en el agua casi hasta ahogarlo 183 veces. La CIA operó centros de interrogación extralegales fuera de territorio estadounidense, organizó una flotilla aérea para secuestros de sospechosos en el mundo, y tuvo un plan, nunca puesto en práctica, para asesinar a líderes de Al Qaeda. En el Reino Unido, agentes del MI5, el servicio de contrainteligencia británico, están sometidos a juicio por colusión en el maltrato de presuntos terroristas, y los gobiernos en algunos países democráticos, como Italia y España, están en problemas por haber colaborado en las prácticas meta-

constitucionales de Washington.

El Ejército Mexicano no está exento de esta convulsión sobre los nuevos papeles que tienen que jugar las fuerzas de seguridad, pero no estamos contribuyendo a que se abra la discusión sobre su papel en la guerra contra el narcotráfico. La crítica no puede dejar de ser un método de supervisión que haga más costoso el abuso de los militares, pero no puede ser esa la única vía para avanzar en la salvaguarda de los derechos humanos. Se requiere un nuevo marco jurídico que reglamente las acciones de las Fuerzas Armadas, ampliando sus funciones en situaciones extraordinarias, y que se establezcan plazos concretos para su permanencia en las calles y en la lucha contra el narcotráfico. No podemos darnos el lujo de desgastar a los militares como consecuencia de decisiones políticas de los civiles, ni tampoco que lo que hoy son casos aislados termine en una guerra sucia como ha sucedido en el pasado. No debemos olvidar que las Fuerzas Armadas son nuestra última frontera. Para lo bueno y también, recordemos siempre, para lo malo. ■

rrivapalacio@ejecentral.com.mx
www.ejecentral.com.mx

La crítica no puede dejar de ser un método de supervisión que haga más costoso el abuso de los militares, pero no puede ser esa la única vía para avanzar en la salvaguarda de los derechos humanos